

# EL ESTALLIDO SOCIAL DEL 2021

## DENTRO DE LAS LUCHAS SOCIALES EN COLOMBIA<sup>1</sup>

Mauricio Archila Neira<sup>2</sup>

El estallido social en Colombia, que inició el 28 de abril (28 A) de 2021 y se extendió en días siguientes, se caracterizó, en comparación con protestas anteriores, por su amplia cobertura espacial, masiva participación social, larga persistencia, radicalidad inusitada y, desafortunadamente, por la violenta respuesta estatal. Veamos estas novedades en el contexto de las luchas sociales en Colombia desde 1975, según la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) de CINEP.

Sin duda, la pluralidad de motivos de la movilización explica algunas de esas características. En efecto, las «demandas» del 28 A venían ampliándose desde mediados del decenio pasado hasta ser casi dos centenas en noviembre de 2019. Ante la negativa gubernamental de negociar el extenso pliego y con la explosión de la pobreza y de las urgencias de ayuda de amplios sectores de la población debido al covid-19, el Comité Nacional de

<sup>1</sup> Este texto resume el capítulo realizado con Martha Cecilia García para un libro sobre el paro del 28 A.

<sup>2</sup> Ph. D. en Historia, pensionado de la Universidad Nacional e investigador del CINEP.

Paro (CNP) planteó al Gobierno de Duque un «pliego de emergencia» el 19 de junio de 2020, que se concretaba en seis puntos en torno a salud, renta básica, defensa de la producción nacional, matrícula cero en las universidades públicas, derechos étnicos y de género, y mejores condiciones de vida. Cerca del 28 de abril se agregaron el retiro de la impopular reforma tributaria de Carrasquilla y el rechazo a la erradicación forzada de los cultivos ilícitos y al uso de glifosato. De esta forma, salieron a flote las profundas inequidades de nuestra sociedad y la persistencia de la violencia, que eran factores estructurales exacerbados por la pandemia.

El peso de estos factores estructurales agravados por la coyuntura de finales de abril se refleja en el gráfico 1. Hay una tendencia histórica a la disminución de motivos materiales que contrasta con el incremento de reclamos políticos, la exigencia de derechos humanos y contra los incumplimientos estatales. Lo mismo se puede decir de servicios domiciliarios y sociales como la educación y la salud, tema muy agitado durante la pandemia. Ello no significa que se hayan superado las inequidades socioeconómicas, sino que otros temas políticos y culturales adquieren prioridad, entre otros factores por la violencia.

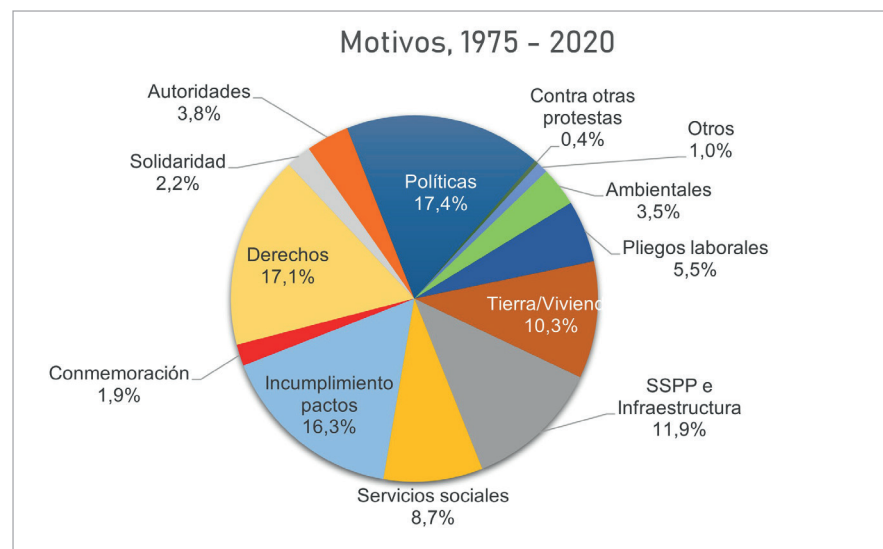
La amplitud y heterogeneidad de los reclamos y actores, así como las dificultades de negociación, explican parcialmente la gran «duración» del

estallido social. En efecto, el CNP solicitó unas garantías para iniciar los diálogos con los delegados de Duque —que fueron cambiando en los pocos días en que se sentaron a conversar—, garantías tales como la desmilitarización de las ciudades, el castigo a los responsables de la violencia estatal y el respeto al derecho de protesta consagrado en la *Constitución Nacional*. El Gobierno nunca aceptó esas condiciones, pues exigía levantar la protesta antes de dialogar. De esa forma, tras infructuosos encuentros, se cancelaron las reuniones formales con el CNP, mientras hábilmente los delegados gubernamentales llamaban a vagos diálogos con otros actores, incluidas las primeras líneas; sin embargo, nunca hubo real negociación con ellas. En términos de duración del estallido social, distinguimos dos momentos: en la primera fase hubo una movilización

muy fuerte y persistente hasta mediados de junio, cuando el CNP decidió acudir al Congreso para tramitar los reclamos más urgentes, y desde ese momento hasta el fin de año la protesta siguió intermitentemente en los puntos de resistencia y en otros espacios resignificados, en particular los 28 de cada mes.

Estos mismos factores explican también la amplia *cobertura* del estallido social, incluso considerándola como una sola protesta de carácter nacional. Según la BDLs, abarcó 397 municipios, el 35,5 % del total, y ciertamente englobó a los más densamente poblados<sup>3</sup>. En todo caso, creemos que el 28 A ha sido la protesta de mayor cobertura territorial en la historia del país desde el Bogotazo de 1948. Además, en el pasado paro nacional resalta la estrecha articulación entre campo y ciudad, algo que ya se ha-

Gráfico 1.



<sup>3</sup> Tal vez aquí esté más ajustado a la realidad el dato de la Policía que habla de 860 municipios, pues nuestra base de datos solo incorpora aquellos espacios mencionados en las fuentes de prensa consultadas, mientras la fuerza pública está reportando directamente en terreno (Policía Nacional, 2021, p. 1).

bía visto en 2013, y sobre todo desde 2019, pero que adquiere una sólida y permanente expresión en esta protesta. Ver apartadas comarcas movilizándose en forma permanente no era algo frecuente en el país.

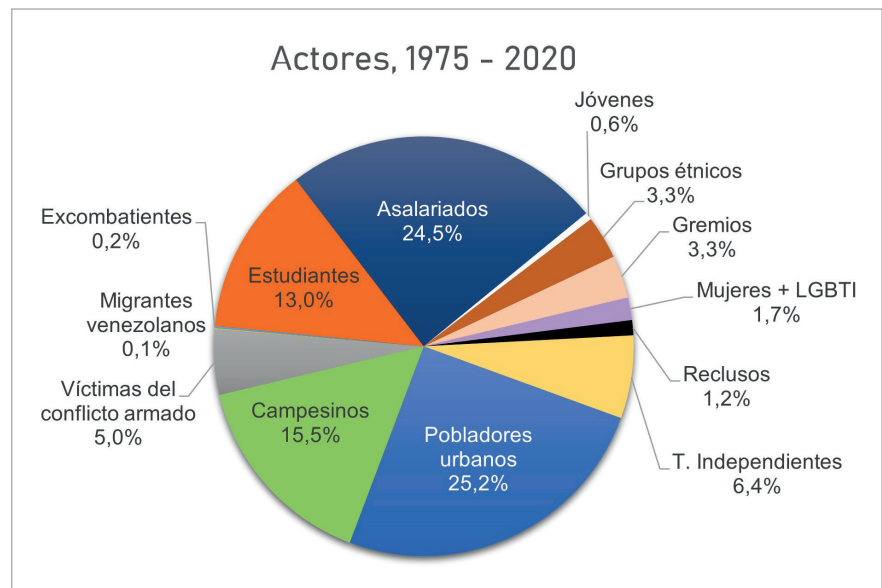
En cuanto a los *actores* del estallido social, fueron muy variados y heterogéneos, lo cual favoreció su masividad y amplitud, pero dificultaron la organización y la cohesión del estallido social, que tal vez por definición es espontáneo e incontrolable. Desde el 28 A hicieron presencia actores con tradición de lucha como los obreros, campesinos, indígenas, estudiantes y, en general, pobladores urbanos. Algunas de sus organizaciones figuraron, convocando el paro y luego manteniendo la movilización cuando el liderazgo del CNP fue disputado. Pero también irrumpieron nuevos rostros en las multitudes. Veamos con detenimiento esta variopinta participación social.

La activa participación de los actores tradicionales en las protestas recientes ratifica la tendencia histórica de la BDLS, como se constata en el gráfico 2. De esta forma, sectores con identidad de clase como los asalariados y campesinos retoman una alta visibilidad luego de que en los años 90 y comienzos del siglo el impacto del neoliberalismo y de la violencia contra ellos les hubiera mermado temporalmente su capacidad de lucha. Desde esas épocas se han hecho visibles los pobladores urbanos, mientras los estudiantes mantienen su presencia histórica. A ellos se les unen los grupos étnicos, especialmente indíge-

nas, cada vez más protagonistas de las protestas en el país, como en el resto del continente. Igualmente, llama la atención el aumento de la presencia de los gremios, especialmente los camioneros y transportadores informales, así como los pequeños mineros tachados de ilegales.

**Sin embargo, en el estallido social del 28 A se hicieron visibles nuevos actores, acordes con los tiempos que vivimos. Así, vimos desfilar por las calles y veredas, además de jóvenes y viejos, animalistas al lado de veganos y ambientalistas en general, feministas y LGBTIQ, afrocolombianos con indígenas y mestizos y, en general, gentes pobres golpeadas por la pandemia. Mención aparte merecen las primeras líneas, consideradas por muchos como las protagonistas del estallido social luego de la transición del CNP de mediados de junio, conformados en parte por los jóvenes «sin-sin» (sin empleo, sin educación, sin futuro...).**

**Gráfico 2.**





En el estallido social, los tradicionales *repertorios* de lucha fueron desplegados con gran creatividad tanto ritual como simbólica. Pero no faltaron quienes acudieron a formas más radicales de protesta

contra la policía y sus instalaciones o vehículos. La ira popular también se orientó contra algunos símbolos del capital privado como bancos y grandes comercios o contra bienes públicos semiprivados como el

transporte articulado. La brutal respuesta policial radicalizó aún más los repertorios de protesta, marcando una diferencia con las tendencias históricas en este rubro.

De acuerdo con el gráfico 3, viene aumentado la movilización en todas sus modalidades —marchas, mítines, concentraciones, plantones, desfiles, paradas— y los bloqueos. Estos últimos han subido con el paso de los años y no solo se trata de los llamados «cortes de rutas», sino también de bloqueos de lugares de producción, especialmente extractivista como el carbón y el petróleo. Mientras tanto, se observa que disminuye el paro —el gran legado del movimiento obrero—, las tomas de entidades, las invasiones de tierras rurales y de suelos urbanos, y, especialmente, ¡los disturbios! En efecto, el grueso de la protesta en el país sigue siendo pacífico, como se vio en el pasado estallido social, aunque el Gobierno lo niegue.

En cuanto a *adversarios* de la protesta (Gráfico 4), el gran antagonista, histórica y coyunturalmente, es el Estado en sus distintas instancias. Se destacan en forma creciente el Gobierno central y los municipales —con más del 40 % del total de luchas—, no así los departamentales, como si estos no fueran instancias decisorias. También se observa el creciente peso de los actores privados —empresarios— y el declive relativo de los grupos armados irregulares, tal vez como consecuencia de los procesos de desmovilización que han vivido.

Pero lo ocurrido en el estallido social marca radicales diferencias con la trayectoria previa. En esta protesta, la *respuesta estatal* combinó la

negativa a negociar con una brutal represión. En cuanto a lo primero, de parte del Gobierno hubo dilación en los diálogos para establecer una mesa de negociación con el CNP, mientras soterradamente estimulaba la división anunciando diálogos con otros protagonistas que tampoco se concretaron. En cambio, sí se sentó a hablar con los sectores que le eran cercanos, como empresarios, militares, iglesias y los partidos que lo apoyaban. Y siempre defendió a las fuerzas del orden, especialmente a la Policía, a la que, ante las exigencias de reformarla, simplemente le hizo un cambio cosmético.

Con todo, la principal respuesta estatal ante el estallido social fue la represión, especialmente a través de la Policía y, en concreto, del ESMAD. La violencia policial contra la protesta no era algo nuevo en el país, lo que sí sorprendió fue su desproporcionado aumento durante el pasado paro nacional. Si en noviembre de 2019 cobró la vida de Dilan Cruz, y el 9 y 10 de septiembre de 2020 las vidas de 13 personas, incluyendo la de Javier Ordóñez, para el 28 A se cuentan cifras muy superiores. Según el informe de las ONG de derechos humanos Temblores e Indepaz, hubo los siguientes actos de violencia entre el 28 de abril y el 28 de junio de 2021 en el marco del paro: 75 asesinatos —44 de presunta autoría de la fuerza pública—, 1.468 casos de violencia física, 83 de violencia ocular, 1.832 detenciones arbitrarias y 28 víctimas de violencia sexual, para un total de 3.486 agresiones (Temblores y Indepaz, 2021, p. 4).



**Aunque el 28 A tuvo logros visibles, como la caída de la reforma tributaria y de su promotor, lo más notorio fue la forma en la que el pueblo colombiano defendió su dignidad, demostrando que no está dispuesto a dejar que las cosas sigan como venían. Vamos a ver cuánto aguanta este desafío al orden establecido.■**

Gráfico 3.

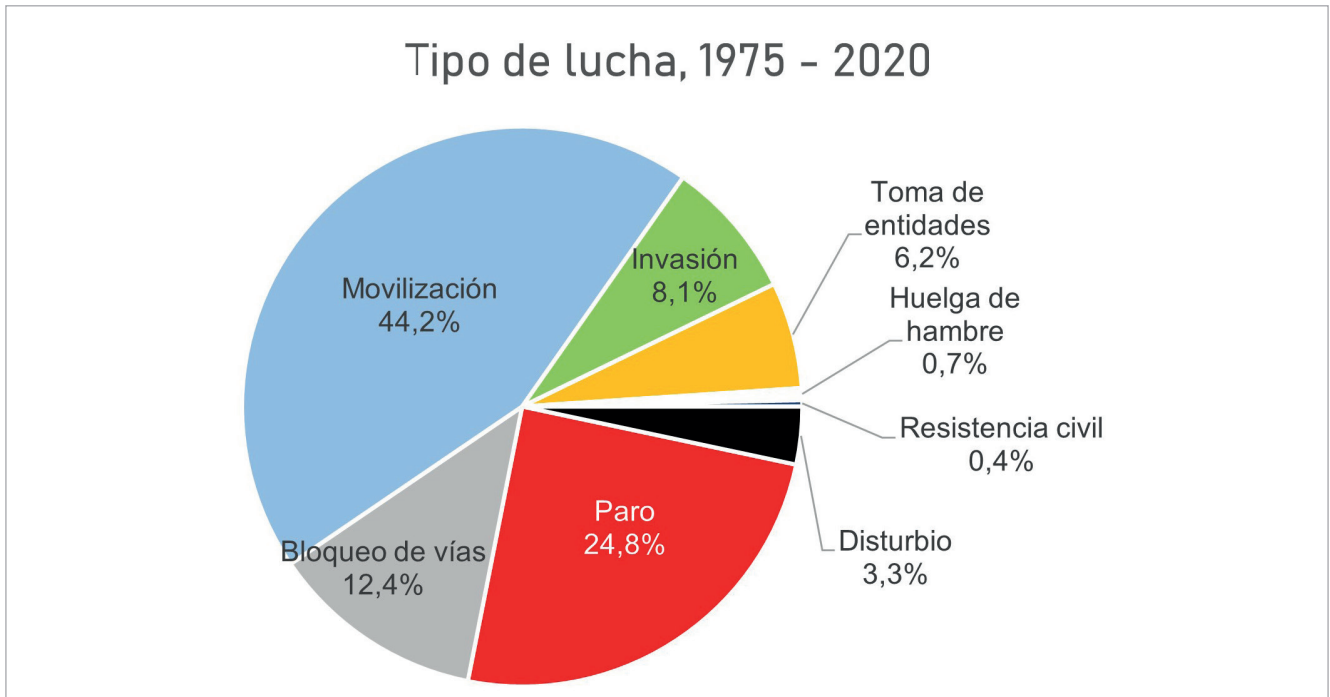


Gráfico 4.

